

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL JUZGADO VEINTIOCHO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO

Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil veinte (2020)

#### I. OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decidir la acción de tutela promovida por **LEIDY VANESSA MORENO CANTOR** en contra de la empresa **OPORTO POLLO PORTUGUES**, por la presunta vulneración de su derecho fundamental constitucional a la petición.

#### II. HECHOS

Indicó que el 14 de agosto de 2019, inició a trabajar en la compañía accionada a través de un contrato verbal a término indefinido, en donde se desempeñó en el cargo de administradora.

Adujo que el 30 de mayo de 2020, finalizó el contrato laboral debido a que presentó renuncia inmediata puesto que se venían presentando demoras en el pago de salarios y emolumentos correspondientes a derechos laborales.

Señaló que de manera insistente se comunicó en aras de que le pagaran las sumas que le adeudan, encontrando siempre respuestas evasivas; motivo por el cual, el 8 de septiembre de 2020, radicó en la oficina

de la accionada a través de correo certificado un derecho de petición, sin que a la fecha haya obtenido respuesta alguna a la misma.

Finalmente, solicitó el amparo del derecho fundamental de petición y en consecuencia, que se ordene al accionado a responder de fondo el derecho de petición radicado el 8 de septiembre de 2020.

### **III. ACTUACIÓN PROCESAL Y RESPUESTA**

El 29 de septiembre del 2020 se admitió la tutela y se ordenó correr traslado de la demanda y sus anexos a la entidad accionada, acto que se surtió con correo electrónico de la misma fecha.

La accionada en respuesta remitida al llamado que se le hiciera para que ejerciera su derecho a la contradicción y defensa, señaló que i) en respuesta a la petición radicada por la accionante, remitieron respuesta al correo electrónico [leidyvanessa.111@hotmail.com](mailto:leidyvanessa.111@hotmail.com), en donde remitieron constancias de los pagos realizados por concepto de parafiscales de los meses laborados incluido el mes de junio del presente año; planilla de pago de cesantías y los correspondientes desprendibles de nómina; ii) que con respecto a las acreencias laborales, tal y como se le había manifestado de manera personal, estos se encontraban contenidos en la respectiva liquidación.

### **IV. CONSIDERACIONES**

La tutela es un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación se contrae a brindar a quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos fundamentales que estima han sido burlados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares de

manera excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado, el cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política.

#### **4.1. Problema Jurídico:**

Compete establecer si en este caso, la empresa OPORTO POLLO PORTUGUÉS, vulneró el derecho de petición de la accionante, quien indica haber radicado un derecho de petición ante esta compañía y no haber recibido contestación alguna a la misma.

#### **4.2. Procedibilidad**

##### **• Legitimación Activa**

De conformidad con el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser ejercida i) directamente por la persona afectada o a través de representante, ii) por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales, iii) mediante agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no está en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que debe manifestarse en la solicitud.

En el presente evento, se satisface la primera de las posibilidades dado que la accionante **LEIDY VANESSA MORENO CANTOR** actúa en nombre propio en defensa de su derecho fundamental de petición, por ello se encuentra legitimada para actuar.

- **Legitimación Pasiva**

Según lo establecido en los artículos 1 y 5º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión en que incurra una autoridad pública, y los particulares en algunos casos.

Teniendo en cuenta que la entidad accionada es una empresa particular, se debe indicar que en el presente caso, como el derecho presuntamente alegado de deriva de una solicitud producto de una relación laboral, pues la accionada fue la empleadora de la accionante. En esa medida, se advierte que tal relación laboral, coloca a la accionada en una posición de preeminencia y a la accionante en una posición de subordinación desde la cual, el empleador puede desconocer o amenazar derechos fundamentales; en consecuencia, la entidad aquí accionada si puede ser sujeto pasivo de la acción de tutela.

- **Inmediatez**

La acción de tutela fue avocada en esta ciudad el 29 de septiembre de 2020, mientras que el derecho de petición que se aduce vulnerado fue presentado por la accionante, el 8 de septiembre de 2020.

Así las cosas, se evidencia que la acción de tutela fue interpuesta en un término razonable que cumple con el requisito de inmediatez.

- **Subsidiaridad**

A voces del artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela *"solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable"*. Disposición desarrollada por el artículo

sexto del Decreto 2591 de 1991, que ratifica la procedencia de la acción de tutela cuando las vías ordinarias no tengan cabida o cuando no resulten idóneas para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable.

En este caso, pretende la accionante la protección del derecho de petición, prerrogativa fundamental que puede ser garantizado por medio de acción de tutela, porque en el ordenamiento interno, no existe otro mecanismo de protección que resulte ser idóneo ni eficaz para conseguir tal fin.

### **4.3 Caso Concreto**

El artículo 23 de la Constitución Política prevé, que, toda persona tiene derecho a presentar *“peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”*.

El derecho de petición<sup>1</sup> es, además de un derecho fundamental *per se*, una manifestación directa de la facultad de acceso a la información que le asiste a toda persona (art. 20 Const.), así como un medio para lograr la satisfacción de otros derechos, como la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, entre otros.

En consecuencia, toda persona puede elevar ante las autoridades públicas y organizaciones privadas, en desarrollo de derechos fundamentales, solicitudes frente a asuntos, tanto de interés general como particular, sobre las cuales se le debe responder en forma oportuna y cabal, según lo dispuesto normativamente.

---

<sup>1</sup> T-099/2014

La respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la petición, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación que permita al peticionario conocer, frente al asunto planteado, cuál es la situación y la disposición o criterio del ente respectivo.

Así, se ha advertido que se satisface este derecho cuando se emiten y reciben respuestas que abarcan en forma sustancial y resuelven, en lo procedente, la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido. De manera que no puede entenderse vulnerado el derecho simplemente porque la contestación dada al peticionario dentro de los términos dispuestos sea negativa, pues si efectivamente atiende de fondo el asunto inquirido, se ha satisfecho tal derecho de petición.

Frente a las características esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo cardinal se halla en la resolución y contestación cabal y oportuna de la cuestión averiguada, ha reiterado la Corte Constitucional<sup>2</sup>:

*“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares<sup>3</sup>; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y*

---

<sup>2</sup> T- 249 de febrero 27 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>3</sup> T- 695 de agosto 13 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

*acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición<sup>4</sup> pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa<sup>5</sup>; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;<sup>6</sup>y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.”*

Dentro de este contexto, es claro que el derecho de petición no solo envuelve la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y los particulares, en los casos señalados por la ley y jurisprudencialmente desarrollados, y efectivamente a obtener oportuna, clara, precisa y congruente respuesta de fondo, sino que es también garantía de transparencia. La renuencia a contestar de tal manera conlleva, en consecuencia, a la vulneración del derecho de petición<sup>7</sup>.

En el caso concreto, se advierte que la accionante indicó haber radicado una petición ante la entidad accionada, dirigida a obtener copia de comprobantes de pago de parafiscales y desprendibles de nómina del tiempo que laboró en esa compañía; de igual forma, solicitó el pago de diferentes acreencias laborales.

Frente a lo anterior, el extremo accionado allegó respuesta en donde manifestaron que una vez revisado el escrito de tutela, advierten que a la accionante se le dio contestación a su petición, pues se procedió a remitirle a su correo electrónico [leidyvanessa\\_111@hotmail.com](mailto:leidyvanessa_111@hotmail.com); copia de los pagos por concepto de parafiscales, planilla del pago de cesantías y desprendibles de nómina.

---

<sup>4</sup> T-1104 de diciembre 5 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

<sup>5</sup> T-294 de junio 17 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>6</sup> T-219 de febrero 22 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.

<sup>7</sup> T-077 de febrero 11 de 2010, M.P. Nilson Pinilla.

Ahora bien, atendiendo a que en el presente evento se está realizando el análisis propio del amparo del derecho a la petición y no del pago de acreencias laborales por vulneración de derechos fundamentales; es por esto, que en el presente caso al evidenciar que la respuesta entregada a la accionante si responde a lo solicitado en el acápite de pretensiones, deberá negarse la acción de tutela por la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.

Lo anterior es así, pues se evidencia que en efecto, la accionada realizó las gestiones necesarias para hacer cesar la vulneración del derecho de petición incoado por la solicitante, toda vez que ha procedido a resolver de fondo la solicitud presentada, y por consiguiente, resulta del caso reconocer, que nos encontramos frente a lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha denominado un hecho superado. Al respecto se señaló:

*“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.*

*Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.*



*No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto que, la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.”-8.*

Y en el presente caso se habla de un hecho superado, porque dentro de la contestación recibida y remitida por la entidad accionada al requerimiento que se le hiciera, se constata que se ha resuelto la petición elevada por la parte actora.

Esta situación hace que la vulneración al derecho fundamental que inicialmente había dado motivo a interponer esta acción de tutela haya sido superada, razón por la cual habrá de negarse la acción constitucional, siendo del caso recordar que sólo si la solicitud no es atendida, surge la afectación de los derechos y por ende la posibilidad de acudir a la acción especial y excepcional de la tutela, para que el juez constitucional restablezca la garantía vulnerada y si de lo que se trata es de no estar conforme con la respuesta obtenida, ello escapa a las facultades otorgadas al juez de tutela, pues está obligado al restablecimiento de los derechos pero no a intervenir en la definición del asunto o a indicar el sentido de la respuesta.

Finalmente, se advierte a la accionante que si bajo su consideración, la accionada ha desconocido derechos laborales, deberá interponer las acciones correspondientes ante autoridad competente, en aras de que después de agotado el debate probatorio necesario se pronuncien respecto de las solicitudes puntuales de la parte actora.

---

<sup>8</sup> Cfr. Sentencia T-308 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTIOCHO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

### **RESUELVE**

**PRIMERO. - NEGAR** por haberse configurado el fenómeno de hecho superado, el amparo del derecho fundamental de petición invocado por la señora **LEIDY VANESSA MORENO CANTOR** en contra de la empresa **OPORTO POLLO PORTUGUÉS**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

**SEGUNDO. - NOTIFICAR** la sentencia de acuerdo con las previsiones del Art 30 del Decreto 2591 de 1991, en el evento de que no sea impugnada, remitir la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**Firmado Por:**

**CATALINA RIOS PENUELA**

**JUEZ MUNICIPAL**

**JUZGADO 028 PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**201506fb6a5c66c10d2a858303e13a0b0392c7390e5127fdebd03d99a3a53c81**

Documento generado en 13/10/2020 08:22:00 a.m.